

De la gestión Taiana a la “misión Ivanissevich”. Las universidades nacionales entre la renovación y la reacción (1973-1976)

Lucía Abbattista* y Ana Julia Ramírez**

Introducción

Sintetizar en unas pocas páginas la historia de las universidades nacionales durante los años 1973-1976 resulta un desafío sumamente interesante aunque también una tarea compleja. Entre los motivos, podemos mencionar la amplitud y heterogeneidad de un conglomerado universitario que por entonces casi triplicó su tamaño,³¹⁵ así como la diversidad de dimensiones, trayectorias y situaciones locales específicas que ponen en tensión cualquier interpretación general.

A esta diversidad, tenemos que sumar la densidad y vertiginosidad del proceso político que caracterizó a este período. Un período que se inicia con la recuperación de la institucionalidad democrática luego de diecisiete años de proscripción de las mayorías populares, pero que rápidamente se desliza hacia un programa de derecha que incluyó formas novedosas de represión paraestatales, para culminar, en

1976, con un nuevo golpe de Estado y la implementación de un régimen sistemático de exterminio y desapariciones forzadas. Durante 1973 y 1974, en particular, este denso y vertiginoso proceso tuvo en los actores universitarios a uno de sus motores más dinámicos y luego a una de sus principales víctimas. Por ello mismo, es necesario pensar las dinámicas y conflictos específicamente universitarios en articulación permanente con el devenir político general del que formaron parte.

En virtud de ello, el artículo se organizará en dos partes. En la primera, sintetizamos los lineamientos generales de la política universitaria implementada durante el período en su conjunto, tanto en el marco de la gestión del ministro Jorge Taiana como de las gestiones de los ministros Oscar Ivanissevich y Pedro Arrighi, con la intención de mostrar los problemas generales que preocuparon y ocuparon a la dirección política del sistema universitario en el período y su vinculación con el proceso político más general. En la segunda parte, presentamos tres estudios de casos con la intención de mostrar con mayor densidad y detalle la diversidad y el alcance de las experiencias de transformación universitaria que se intentaron llevar adelante al calor del entusiasmo político que trajo apare-

315 Como señaló Laura Rovelli (2009), a partir del Plan Taquini y las iniciativas desplegadas en distintas regiones entre los años 1970 y 1975, el número de universidades nacionales pasó de diez a veintiséis.

* Profesora de Historia y magíster en Historia y Memoria por la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Actualmente es docente e investigadora tanto en esta institución como en el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes. Además, desde 2018 se desempeña como prosecretaria de Derechos Humanos de la FaHCE-UNLP. Sus principales trabajos abordan las batallas culturales del tercer peronismo y la divulgación de la historia en los Espacios de Memoria.

** Profesora de Historia por la UNLP y máster en Artes por la Universidad del Estado de Nueva York, sede Stony Brook. Actualmente es profesora adjunta del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP, donde también se desempeña como decana desde mayo del 2018. Sus principales trabajos abordan la relación entre acción colectiva y radicalización política en diversas geografías y momentos de las décadas del sesenta y setenta en la Argentina.

jado el triunfo electoral de Héctor Cámpora en 1973, tanto como las modalidades con las que se concretó su clausura a partir de 1974.

Algunos antecedentes necesarios

Para comprender plenamente la situación de las universidades nacionales en 1973 es necesario exponer brevemente algunos elementos y dinámicas del período inmediatamente anterior. En particular nos referimos al proceso de radicalización y peronización de amplias capas de los sectores medios que se inició hacia 1955 y que se profundizó y aceleró notablemente durante la “Revolución Argentina” y más particularmente a partir de 1969 con el Cordobazo.

Este proceso, que arraigó de modo muy notable entre las juventudes y dentro del mundo cultural e intelectual, impactó de un modo muy directo en el terreno universitario a partir de dos tendencias centrales. Por un lado, incrementó el activismo estudiantil, que se erigió en uno de los principales movimientos de oposición a las políticas regresivas y represivas de la dictadura de la “Revolución Argentina” y que tuvo en la Noche de los Bastones Largos su episodio más sintomático para el ámbito universitario. Este activismo estudiantil, a su vez, creció de la mano de un contexto internacional en el que las luchas antiimperialistas y revolucionarias dominaban la escena mundial y de un contexto local donde la revisión del peronismo como movimiento revolucionario constituyó una alternativa cada vez más atractiva para muchos intelectuales y miles de jóvenes universitarios (Bozza, 2001).

Por otro lado, la radicalización y peronización de los universitarios implicó también replanteos profundos en relación con la concepción de la universidad que históricamente había sostenido la tradición y política peronista. Como claramente lo señala Ana Barletta (2002), a lo largo de los años sesenta se dio dentro del ámbito universitario un proceso por el cual la institución universitaria que había sido tan cuestionada por el peronismo, como “institución del régimen”, “república de los estudiantes” o como “isla democrática” ajena a los intereses del pueblo, em-

pezaba a ser valorada como “escenario propio” desde donde disputar el poder (Barletta, 2001 y 2018; Ramírez, 1999; Suasnábar, 2004; Lanteri, 2009; Dip, 2017; Friedemann, 2015).

En este marco se fueron delineando los criterios y sentidos que articularon las propuestas y programas concretos que se pusieron en marcha en la gran mayoría de las universidades nacionales con la intención de acompañar el proceso de reconstrucción nacional que se propuso el gobierno de Cámpora a partir del 25 de mayo de 1973.

Universidades para la reconstrucción

En sintonía con la ola de tomas y ocupaciones de gran parte de las instituciones públicas que acompañó a las primeras semanas del gobierno de Cámpora (Nievas, 1999; Abbattista y Ramírez, 2011), los estudiantes, profesores y trabajadores no docentes vinculados con la Tendencia Revolucionaria del peronismo tomaron también las universidades nacionales en diferentes puntos del país.

A diferencia de las tomas que enfrentó el peronismo en los años cuarenta, motorizadas por sus opositores, estas se realizaban en nombre del nuevo gobierno popular. Sus objetivos eran resguardar el patrimonio universitario hasta tanto el Poder Ejecutivo pusiera en funciones a las nuevas autoridades, así como repudiar y comenzar a desandar en los hechos las políticas del sector implementadas por el anterior gobierno dictatorial.

Fue en este contexto que Héctor Cámpora, junto al recientemente nombrado ministro de Educación, Jorge Alberto Taiana (médico personal de Perón y ex rector de la UBA durante el segundo gobierno peronista), dispusieron la intervención de las universidades nacionales y la designación de los primeros quince rectores interventores, el 29 de mayo.³¹⁶

316 Decretos 35 y 37, del 29 de mayo de 1973, que pueden consultarse en el documento *Pueblo, Educación y Cultura*, editado por el Ministerio de Cultura y Educación en junio de 1973, y en su *Boletín de Comunicaciones*, 15 de junio de 1973, año XVI, nro. 1.

Un día más tarde, en un acto multitudinario organizado en el Rectorado de la UBA, Taiana procedió a poner en funciones a Rodolfo Puiggrós (UBA), Rodolfo Agoglia (UNLP) y Víctor Benamo (UNS). Antes de comenzar, un delegado de la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires (APUBA) hizo entrega del establecimiento a Taiana en forma simbólica y el ministro, tras agradecer, expresó:

Acepto emocionado y profundamente complacido la entrega de este patrimonio de ciencia y cultura protegido por primera vez en muchos años por el mismo pueblo [...] Todo esto significa algo más que ocupar la Universidad, significa impulsar la Universidad en el proceso popular en toda su amplitud. No se trata de que las puertas de la Universidad se abran al pueblo; esto es una concesión. Es la Universidad del pueblo, es el pueblo dentro de la Universidad. Así debemos contemplarlo y así debemos proyectarlo para el futuro. Este es el significado de la presencia de ustedes aquí.³¹⁷

Esa escena ilustra claramente el peso político alcanzado por diversos actores del peronismo revolucionario en la gran mayoría de las universidades nacionales, y su inicial convergencia con la dirección de la cartera Educativa respecto del rol de las universidades en el proceso de reconstrucción nacional.

No obstante, en algunas universidades la designación de los interventores fue un foco de conflicto desde el inicio y Taiana se sumó a los llamamientos de otros funcionarios para retornar al orden en los establecimientos ocupados. Para encauzar aquel clima de efervescencia y movilización que no siempre cedía fácilmente, uno de los principales desafíos de Taiana fue erradicar las huellas identificadas con el autoritarismo en las universidades. Ello se tradujo en la decisión política de crear una comisión

317 “Taiana puso en posesión a los interventores en universidades de La Plata, Buenos Aires y el Sur”, *El Día*, 31 de mayo de 1973, p. 5.

ministerial para revisar los planteles docentes y no docentes que habían sido afectados por diferentes oleadas de cesantías y exilios ocurridos en los años precedentes, así como estimular la participación de los diversos actores universitarios en la toma de decisiones —en particular la de los estudiantes—, a la vez que generar las condiciones institucionales para que los proyectos de renovación universitaria que estos actores promovían pudieran avanzar de la manera más orgánica y ordenada posible.

En particular, la revisión de los planteles, que fue muy celebrada porque reconocía a los desplazados tanto de 1955 como de 1966, se puso en marcha de inmediato pero también rápidamente se volvió impracticable por los múltiples conflictos que generaba. Asimismo, el Ministerio dio luz verde a las universidades para avanzar en la reforma de sus criterios de admisión, erradicando los sistemas de ingreso restrictivos, y de sus objetivos académicos, estimulando la revisión de los planes de estudio y sus programas de posgrado e investigación.³¹⁸ Iniciativas que se consideraban avances parciales hasta tanto se pudiera constituir un nuevo marco legal que reemplazara al Decreto-Ley 17245 vigente desde 1967.

Una ley universitaria para la reconstrucción nacional

La necesidad de contar con un nuevo marco normativo para las universidades nacionales ocupó el centro de la acción política de Taiana casi desde su designación, y antes de cumplir un año en el Ministerio la nueva legislación ya estaba vigente. Sin embargo, no fue un camino sencillo el que llevó a su sanción y gran parte de los actores políticos y universitarios que participaron con gran expectativa en su elaboración apenas si aceptaron su versión final.

318 Esas resoluciones firmadas en diversas universidades, junto a documentos como el discurso de Taiana ante la Escuela Nacional de Guerra o el Plan Trienal elaborado a fin de año por Juan Domingo Perón, pueden permitir reconstruir las principales preocupaciones del gobierno respecto al área en 1973.

La amplia voluntad de convergencia política que propiciaba desde su cartera llevó a Taiana a convocar a figuras que representaban líneas muy diversas en política educativa para constituir una comisión que se abocara a trabajar en esta tarea.³¹⁹ Sus funciones eran asesorar al ministro, escuchar a los sectores que quisieran acercar propuestas y articular un proyecto para presentar al Congreso. En el *Boletín de Comunicaciones* del Ministerio podía leerse que con este amplio armado se buscaba trascender “desde su primera etapa, los condicionamientos políticos, corrigiendo así la trayectoria de los errores del pasado”.³²⁰

A pesar del intenso trabajo de articulación política que realizó esta comisión,³²¹ otras fuerzas partidarias también presentaron sus propios proyectos como expresión de sus diferencias sustantivas.³²² Asimismo, el proyecto presentado por el PEN en el Senado el 12 de febrero de 1974 fue muy criticado durante su tratamiento. Desde el campo opositor, la Unión Cívica Radical y otros partidos políticos cuestionaron los artículos que retomaban la tradición peronista de reservar al Poder Ejecutivo la potestad de nombrar a las autoridades universitarias o in-

319 Fueron convocados Ricardo Guardo, Jorge Vanossi, Horacio Osvaldo Domingorena, José Clavero, Julio Fortezza y como secretario Alberto Godoy. Por ejemplo, Ricardo Guardo había sido un diputado justicialista impulsor de la Ley 13031 (conocida, de hecho, como “Ley Guardo”) y Horacio Domingorena había sido el radical propulsor en Diputados de la Ley de Enseñanza Privada bajo la presidencia de Arturo Frondizi (Ley 14557, conocida como “Ley Domingorena”).

320 “La reconstrucción universitaria”, *Boletín de Comunicaciones*, año XVI, nro. 1, 1973.

321 En las fojas 3823-3825 del *Diario de Sesiones* de la Cámara de Senadores correspondiente a la sesión extraordinaria de los días 7 y 8 de marzo de 1974, pueden encontrarse los listados de los 57 organismos, instituciones y personas que presentaron trabajos relacionados con la ley universitaria a la comisión creada en 1973, los participantes de la reunión con 24 partidos políticos para la consulta referente a la ley organizada por Presidencia el 21 de enero de 1974 y los participantes en la reunión con agrupaciones y federaciones universitarias referente a la reforma de la ley realizada el 29 de enero de 1974.

322 Así lo hicieron la Unión Cívica Radical, la Alianza Popular Revolucionaria y los demócratas progresistas.

tervenir las universidades ante ambiguas causales sin la aprobación del Congreso. También se cuestionaba la exclusión de los graduados de los ámbitos del cogobierno y las restricciones impuestas a los extranjeros para ejercer la docencia o adquirir derechos políticos como estudiantes.

A tono con su voluntad conciliadora, el gobierno se hizo eco de algunas de estas críticas y accedió a incluir la plena autonomía y el derecho de cada institución a elegir sus propias autoridades. En una entrevista brindada en 1975, Taiana remarcó que el propio Perón lo había instado a aceptar esta perspectiva y que le había dado instrucciones precisas de acordar la ley con Ricardo Balbín, el principal dirigente de la UCR. En palabras de Taiana, el presidente le habría dicho: “Yo no tengo interés en una universidad peronista. En 1955 teníamos una ley que la llamaban Ley Perón, y todos los estudiantes en contra. Trate de establecer una distancia entre el Poder Ejecutivo y la universidad. Que ella elija sus propios rectores, porque aunque usted elija a Jesucristo también se lo van a discutir”.³²³

Si bien esta revisión permitió lograr los acuerdos necesarios para aprobar la ley, no alcanzó para generar apoyos fuertes en la oposición ni en las propias bases estudiantiles ya que, durante su tratamiento, se acordaron también otras modificaciones. Centralmente, la incorporación de un artículo que prohibía “en el ámbito de la universidad el proselitismo político partidario o de ideas contrarias al sistema democrático” (art. 5). Modificaciones que encendieron el malestar y la crítica del movimiento estudiantil. Desde la JUP se lo denunciaba como un intento más de los “infiltrados imperialistas en el gobierno y del movimiento peronista” para “echar a todos los que representan más fielmente los postulados de liberación”;³²⁴ desde la Franja Morada y otras agrupaciones de izquierda, se alertaba que este artículo habilitaba a “desen-

323 “Aunque usted elija rector a Jesucristo, se lo van a discutir”, *La Opinión*, 9 de agosto de 1975, p. 10.

324 “La JUP ante la Ley. Habla José Pablo Ventura”, *El Descamisado*, nro. 43, 12 de marzo de 1974, p. 8.

cadena el macartismo en la universidad, como ya se ha hecho notorio en otros organismos e instituciones manejadas por el peronismo”,³²⁵ y la FUA organizó una manifestación para demostrar su disconformidad.

A pesar de ello, el 8 de marzo la ley fue aprobada en el Senado. Su votación fue unánime en general, aunque en el tratamiento de los artículos en particular se siguieron expresando las críticas y los rechazos antes mencionados. Con mayor discusión aún, la ley fue igualmente aprobada por amplia mayoría también en la Cámara de Diputados, el 14 de marzo.

El debate sobre los aspectos señalados fue tan controversial que algunas innovaciones muy significativas que la ley contenía —como la inclusión de los no docentes en el cogobierno— pasaron casi desapercibidas.

Así, a pesar de los trabajosos y auspiciosos acuerdos intrapartidarios que logró encauzar Taiana para finalmente aprobar este proyecto, la ley no sólo no alcanzó para comprometer un apoyo sólido por parte de las fuerzas políticas sino que se aprobó sin el respaldo de los agrupamientos estudiantiles, “la fuerza política real de la universidad”, esa que “en los últimos años había hecho naufragar todo intento de reglamentación inconsulta”.³²⁶

La discusión y aprobación de la Ley Taiana dan cuenta de las dificultades, desacoples y ritmos dispares que atravesaban a la política en esa coyuntura. Por un lado, podemos observar las voluntades convergentes entre los partidos mayoritarios —UCR y peronismo— por saldar un antagonismo constitutivo de su enfrentamiento histórico. Y en este punto, Taiana tuvo gran éxito, cuyos efectos aún perduran. Sin embargo, su capacidad de negociación no alcanzó ni para contener las voluntades disciplinadas

325 “Storani: Una ley ambigua y peligrosa”, revista *Panorama*, nro. 197, 14 de marzo de 1974, p. 7.

326 “Universidad: un año crítico. La nueva ley podría terminar con la armonía entre el gobierno y los alumnos”, revista *Panorama*, nro. 197, 14 de marzo de 1974, p. 6.

ras y reaccionarias de la ortodoxia peronista, ni para encauzar, a través de un nuevo marco normativo, las expectativas de cambio de las juventudes radicalizadas.

En este contexto cada vez más tenso entre las bases universitarias y el Ministerio, Taiana decidió renovar algunas conducciones en las universidades con mayor agitación política. Medidas que en general fueron resistidas, llegando a adquirir, en algunos casos, tonos dramáticos, como, por ejemplo, en la Universidad de Lomas Zamora.³²⁷

No obstante, también en esta misma etapa y de la mano de las fuerzas renovadoras, ocurrieron los nombramientos de Adriana Puiggrós como decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, de Carmen Josefina Suárez Wilson de Diez —mejor conocida como Reyna Diez— como decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP, de Haydeé Massoni como decana de la Facultad de Humanidades del Comahue y de Carmen Elsa Mao como decana de Ciencias Agrarias del Comahue. Las primeras mujeres designadas decanas en la historia del sistema universitario nacional.

La “misión Ivanissevich” y después

En el marco de esta relación desgastada entre el ministro y los sectores universitarios que inicialmente lo habían apoyado, tras la muerte de Perón, Taiana perdió la principal fuente de respaldo que le quedaba y, al igual que otros ministros, tuvo que renunciar,³²⁸ acorralado por los

327 En esta Universidad, el edificio del Rectorado fue ocupado por los estudiantes en repudio al desplazamiento de Pedro Enrique Bustos en ocasión de la normalización. En el marco de esta toma, el 30 de marzo, una patota de derecha disparó desde un auto contra la puerta del Rectorado asesinando al estudiante Hugo Pedro Hansen, militante de la Juventud Peronista de 23 años. Ver “Entierran al estudiante”, *Noticias*, 1° de abril de 1974 (citado en Raffo, 1994: 30).

328 Poco después, temiendo por su vida, emprendió un viaje a España. El 21 de septiembre, su nombre había aparecido en la lista de ejecuciones —realizadas y pro-

sectores ortodoxos que ganaban terreno dentro del gabinete de la presidenta María Estela Martínez de Perón y que lo acusaban de abrir la puerta a la infiltración marxista en el ámbito educativo.

En su reemplazo, el 14 de agosto, prestó juramento como nuevo ministro el viejo cirujano Oscar Ivanissevich. A pesar de que durante el acto de asunción le brindó a Taiana una cordial despedida³²⁹ y expresó una actitud dispuesta al diálogo con todos los actores universitarios, ya en su primer acto oficial, durante una misa por la conmemoración de San José de Calasanz, “protector de las escuelas del Estado”, Ivanissevich expresó la necesidad de recuperar a “las juventudes desorientadas”.³³⁰

Durante las semanas posteriores, grupos no identificados realizaron atentados contra los domicilios de importantes autoridades de la UBA. En la vivienda de Adriana Puiggrós una bomba produjo serios destrozos. En el domicilio del rector interino, Raúl Laguzzi, otra explosión fue responsable de la muerte de su pequeño hijo de apenas 6 meses de edad. Ni una palabra de repudio o solidaridad salió de las oficinas del Ministerio.

Rápidamente quedó claro que el principal objetivo de Ivanissevich era disciplinar a los actores del ámbito educativo que consideraba propicios “al desorden y la rebeldía”, como lo expresó abiertamente en un discurso realizado en el Teatro Colón el 10 de septiembre (Ivanissevich, 1974). Fue en ese acto que el ministro expuso sus verdaderos objetivos y pensares. Allí anunció que se abría una etapa de “lucha a muerte

gramadas— que envió la Triple A a la redacción de Clarín. Sin embargo, un año más tarde regresó, cuando su hijo Jorge Enrique fue detenido a disposición del PEN; y al comenzar la última dictadura fue apresado en el Operativo Bolsa junto a otros ex funcionarios del gobierno depuesto, por lo que él también permaneció en prisión durante largos años.

329 La asunción de cargos”, *La Prensa*, 15 de agosto de 1974, p. 3.

330 “El ministro de Educación habló de desorientación juvenil y marxismo”, *La Prensa*, 24 de agosto de 1974, p. 4.

para conservar la Patria de San Martín y de Perón” en oposición a los sectores que “desde los jardines de infantes a la universidad quiebran el orden constitucional lavando los cerebros a alumnos y maestros para tener maestros, estudiantes y profesionales frustrados que sirvan a sus designios extranjerizantes y subalternizantes”. Según su diagnóstico, el conflicto en las universidades no era universitario, sino resultado de una “conjura internacional que moviliza a algunos estudiantes más proclives al tumulto que al trabajo y el estudio”.

Con estas declaraciones se ganó el apoyo del peronismo ortodoxo vinculado a publicaciones como *Las Bases* y *El Caudillo* y de sectores tradicionalmente antiperonistas, como aquellos del nacionalismo católico articulados en torno a la revista *Cabildo* y del liberalismo conservador que se expresaban a través de diversos diarios como *La Prensa*. Pronto también comenzaron a escucharse algunas voces críticas, provenientes del ámbito parlamentario y universitario. Un ejemplo de ello fueron las solicitadas que publicaron las autoridades de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora en el diario *La Nación* y aquella que publicó la Universidad Nacional de La Plata en *La Opinión*.³³¹ Pero estas voces no alcanzaron para frenar el proceso de avance de la derecha que se inició inmediatamente con la intervención y cierre de la UBA y que, desde entonces, se irá expandiendo, en un espiral de violencia, hacia el resto de las universidades.

Junto con su política persecutoria y represiva, y las cesantías masivas que se produjeron en el marco de la segunda Ley de Prescindibilidad,³³² la gestión ministerial también avanzó en el restablecimiento de los exámenes de ingreso y los cupos a las carreras y comenzó a requerir la

331 “Al Señor Ministro de Cultura y Educación Dr. Oscar Ivanissevich”, *La Nación*, 12 de septiembre de 1974, y “La Universidad Nacional de La Plata a su pueblo”, *La Opinión*, 15 de septiembre de 1974, p. 15.

332 Nos referimos a la Ley N° 20713 del 8 de agosto de 1974. La primera, la Ley 20549 del 31 de octubre de 1973, había sido utilizada fundamentalmente en el ámbito de las empresas públicas (Franco, 2012: 92-93).

presentación de certificados policiales de buena conducta, entre otras medidas limitativas. Todo ello, por su parte, fue acompañado por el cierre de los comedores universitarios y por propuestas académicas de corte conservador y profundamente nacionalistas, como el renombrado “tríptico”.³³³

En el marco de la crisis económica que estalló a mediados de 1975 y que desplazó del centro de la escena al ministro de Bienestar Social, José López Rega, el recambio ministerial alcanzó también a la cartera educativa. Poco antes, la rama universitaria de CTERA había publicado un largo documento titulado “Universidad: la misión del caos y la destrucción” (1975), donde se repasaban las consecuencias de la gestión Ivanissevich en cada universidad nacional. Este documento daba cuenta de que la “misión” había implicado, hasta el 30 de junio de 1975, quince mil cesantías, la anulación de convenios de investigación, la entronización de autoridades totalitarias, como Raúl Zardini (Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA) y Remus Tetu (Universidad Nacional del Comahue - Universidad Nacional del Sur) y numerosos crímenes y persecuciones.³³⁴

Con la asunción de Pedro José Arrighi como nuevo y último ministro de Educación de este convulsionado período constitucional, se produce una nueva oleada de designaciones de autoridades universitarias. Sin embargo, este recambio lejos estuvo de propiciar otro rumbo para la política universitaria (y para el sistema educativo en su conjunto). Al contrario, consolidó los alcances y las dimensiones más repre-

333 A comienzos de enero de 1975, en reunión del Ministerio con rectores e interventores, se dispuso que todas las universidades del país tenían que poner en marcha un ciclo introductorio con tres asignaturas: Idioma Nacional, Historia Argentina y Geografía Argentina, que debían ser aprobadas antes que las otras materias de primer año. Ver “El tríptico fundamental”, en Ivanissevich y Frattini (1975: 39-40), y “Recién cuando se aplique totalmente se podrá valorar el resultado del tríptico”, *La Opinión*, 3 de mayo de 1975, p. 10.

334 “Analiza la CTERA la política universitaria”, *La Nación*, 23 de julio de 1975, p. 5.

sivas y reaccionarias trazadas por la “misión Ivanissevich” (Abbattista, 2019: 172-174). Es por ello que, a pesar de tantas importantes diferencias, en el ámbito universitario se puede pensar a la dictadura de 1976 como una suerte de continuidad —más extendida y sistemática— de estas políticas previas (Barletta, 2018).

Algunos casos

En este apartado, nos interesa retomar las coordenadas generales hasta ahora analizadas pero a partir de la exploración sintética de algunos casos concretos, con la intención de llenar de contenido más preciso las dinámicas de acción y las experiencias de transformación que, según las expresiones de la época, apuntaban a desandar un modelo universitario que reproducía un estado de colonización científica y cultural en favor de los grandes centros de poder, así como explorar también los diversos modos en que las mismas fueron clausuradas a partir de mediados de 1974.

La Universidad Nacional de La Plata

Fue en algunas de las universidades más grandes y tradicionales, como La Plata, Buenos Aires, Tucumán y Litoral, donde los sectores más radicalizados del peronismo adquirieron mayor incidencia en los programas de renovación institucional.

En el caso concreto de la Universidad Nacional de La Plata,³³⁵ las propuestas de transformación habían sido pensadas y debatidas previamente y articuladas en un documento programático denominado “Bases para la Nueva Universi-

335 En los últimos años se ha extendido la indagación sobre diversas dimensiones de la historia de la UNLP correspondiente a esta etapa. En el IDIHCS, contamos con trabajos vinculados con la dinámica política interna (Rodríguez, 2014b; Lanteri y Meschiany, 2019), con el movimiento estudiantil (Ramírez, 1999; Lanteri, 2009), con el análisis del proyecto universitario de 1973 (Lanteri y Meschiany, 2015; Barletta, 2018) y con el avance reactivo de la derecha del peronismo (Abbattista y Carnagui, 2014; Carnagui, 2016), sólo por mencionar algunos.

dad”, impulsado por la Federación Universitaria de la Revolución Nacional (FURN). Fue a partir del horizonte de expectativas plasmado en ese documento que en la UNLP se intentó poner en marcha un nuevo modelo de universidad que se anunciaba como una ruptura total con las tradiciones liberal-reformistas que habían dominado hasta entonces, pero que no implicaba por ello un retorno al modelo de universidad del primer peronismo.

En sus consideraciones generales este documento planteaba que, si bien la “magna tarea” de llevar adelante un proyecto de liberación nacional debía involucrar a todos los sectores, en particular a los universitarios les correspondía,

desmontar la infernal maquinaria que durante años deformara conciencias para hacerlas proclive a la indiferencia, la justificación o al apuntalamiento de la injusticia y la explotación [...] les toca encontrar las herramientas técnicas, culturales y científicas que nos ayuden a optar por la Patria que el Pueblo ha optado, para superar el estado de colonia que decididamente quiere dejar de ser.

El nuevo rector interventor, Rodolfo Agoglia, nombrado por el ministro Taiana y respaldado por los sectores peronistas radicalizados de la UNLP, asumió su cargo con el compromiso de materializar este programa y en pocos meses, desde la presidencia, se dictaron una serie de resoluciones, disposiciones y ordenanzas en consecuencia.

En el terreno más estructural, se destaca la creación del Departamento Central de Planificación (Res. 608 del 20 de julio de 1973), que tenía como objetivo articular con el gobierno nacional en materia de educación, ciencia y tecnología, y hacia adentro de la propia universidad, la responsabilidad de la planificación y la supervisión de la docencia, la investigación y la posgraduación (Lanteri y Meschiany, 2015). Con la Ordenanza 104, de diciembre de 1973, se propuso una nueva estructura académica que comprendía un ciclo de formación de la conciencia nacional,

otro de preparación básica, un tercero de especialización técnico-científico profesional y un último nivel referido a los estudios de posgrado. El primer escalón de esta nueva estructura de enseñanza se puso en marcha a partir del inicio del ciclo lectivo 1974, con la implementación del Curso Introductorio a la Realidad Nacional que debían tomar todos los ingresantes.

Esta nueva estructura de enseñanza, por otra parte, se enmarcaba en una concepción de la universidad sin restricciones que por ello suspendió los cursos de ingreso, derogó los aranceles y creó dispositivos administrativos para facilitar el ingreso de estudiantes latinoamericanos que, en función de la situación política en sus países de origen, no pudieran cumplir con los requisitos formales para la inscripción (Lanteri y Meschiany, 2015).

Otras medidas tomadas de inmediato por el nuevo rector fueron la reincorporación *ad honorem* de los trabajadores docentes y no docentes cesanteados en 1955 hasta tanto se revisara cada caso particular, la amnistía para aquellos otros trabajadores sancionados por realizar huelgas en el período inmediatamente anterior, así como la restitución de sus cargos honorarios a Juan Perón y Eva Duarte de Perón y la resolución que declaraba la incompatibilidad de la docencia universitaria con el trabajo en empresas multinacionales —cuestión que sería retomada posteriormente por el artículo 11 de la Ley universitaria—.

Además, como ha señalado Eduardo Godoy, “poner la Universidad al servicio del Pueblo, requería poner al servicio de todos los organismos estatales nacionales, provinciales y municipales, la capacidad técnica y aun humana que la Universidad tenía” (1995: 155). En ese sentido, la UNLP no sólo puso en marcha consultorías jurídicas barriales, atención asistencial gratuita de odontología y medicina, cursos de capacitación gratuitos para trabajadores y becas para hijos de trabajadores, sino que también, hacia fines del año, firmó un convenio con la provincia de Buenos Aires para desarrollar la “Asistencia recíproca para la elaboración y ejecución de proyectos científicos y tecnológicos” (Godoy, 1995: 155-156).

Estas políticas macro eran acompañadas en el interior de las facultades por un activismo estudiantil que también disputaba las formas y contenidos tradicionales de enseñanza en las cátedras e institutos de investigación. En muchos casos, estas disputas alcanzaron notoriedad pública en la prensa local en la medida en que implicaron la realización de “juicios académicos” que terminaron con la destitución de algunos y algunas docentes.

En marzo de 1974, Agolia renunció a su cargo por estar en desacuerdo con la recientemente sancionada Ley universitaria. Sin embargo, su sucesor, Francisco Camperchioli Masciotra, se comprometió a continuar la dirección política de su predecesor en el marco de una dinámica de acciones y movilizaciones importantes realizadas por los sectores radicalizados.

Las dificultades para avanzar por el camino definido, no obstante, se pusieron en evidencia de inmediato en una Universidad donde sectores de derecha, como la Concentración Nacional Universitaria (CNU), también tenían fuerte arraigo. Como ejemplo del accionar y la dinámica política que propiciaba esta agrupación, podemos mencionar el atentado con bomba en el comedor universitario en septiembre de 1973, el tiroteo ocurrido en las elecciones estudiantiles de la Facultad de Arquitectura en noviembre de ese mismo año y la toma del Rectorado con la destrucción de documentación y mobiliario que realizó esta agrupación el día después que se iniciaran los Cursos de Realidad Nacional en marzo de 1974. Este tipo de episodios fueron creciendo en potencia y sistematicidad en la medida que el clima político general se inclinaba cada vez más a la derecha, sobre todo con posterioridad a la destitución del gobernador Bidegain en la provincia de Buenos Aires y su reemplazo por el vicegobernador Victorio Calabró.³³⁶

336 En la tesis de Juan Luis Carnagui sobre los orígenes de la CNU en La Plata, se registran los tempranos vínculos de la organización con el dirigente de la UOM y cómo esta relación se consolidó a partir de su llegada a la gobernación (Carnagui, 2016: 214).

En este clima cambiante, la ruptura de Perón con Montoneros el 1° de mayo de 1974 y su posterior muerte apenas dos meses después aceleraron la dinámica política tanto a nivel nacional como local y universitario. Como mencionamos previamente, la UNLP había asumido una importante voz pública en repudio a las palabras vertidas por el nuevo ministro Ivanissevich en el Teatro Colón. Fue en este contexto que se produjo una escalada de acciones intimidatorias contra los funcionarios de la UNLP que desembocó, el 8 de octubre, en el asesinato de Rodolfo Achem y Carlos Miguel, secretario administrativo y director del Departamento Central de Planificación de la Universidad, respectivamente. A partir de ese momento, la UNLP fue intervenida y permaneció cerrada hasta comienzos de 1975.³³⁷

Esta nueva etapa, bajo la dirección de Pedro José Arrighi como rector interventor, se identificó con la misión de “limpiar” a la UNLP para devolverla a un clima de “disciplina, respeto y jerarquía”.³³⁸ En esta dirección se desplegaron una serie de acciones persecutorias y represivas contra los sectores radicalizados, que incluyeron cesantías masivas y entrega de listas de nombres de docentes, no docentes y estudiantes a la policía. El informe que Arrighi realizó sobre la etapa previa a su gestión contenía denuncias contra la radio universitaria por difundir “propaganda subversiva”, contra la casa de Joaquín V. González en La Rioja por haber sido utilizada como “refugio de guerrilleros” y contra la imprenta de la Escuela Superior de Periodismo por imprimir “libelos marxistas y castristas”.³³⁹ Estos eran los “focos infecciosos de una ingeniosa penetración marxista” que el nuevo

337 La Plata, 8 de octubre de 1974. Ante los hechos acaecidos contra esta universidad que son del dominio público, elevo a Ud. mi renuncia indeclinable al cargo de...” es la leyenda que puede leerse en cada una de las notas de renuncia presentadas, hoy disponibles en el Archivo Histórico de la Universidad Nacional de La Plata. Ver también “Receso en la Universidad de La Plata”, *La Prensa*, 10 de octubre de 1974, tapa y p. 5

338 Asumió ayer sus funciones el interventor en la Universidad”, *El Día*, 22 de noviembre de 1974, tapa y p. 7.

339 “Las denuncias de Arrighi se suman a las del rector Tetu”, *La Opinión*, 28 de febrero de 1975, p. 10.

rector visualizaba “dirigida inteligentemente desde la presidencia de la Universidad” con el objetivo de entregarla a “grupos de izquierda que responden a la sinarquía internacional”.³⁴⁰

Cuando Pedro José Arrighi fue nombrado nuevo ministro de Educación, tras el desplazamiento de Ivanissevich, dejó en el Rectorado de la UNLP a un hombre de su confianza, Héctor E. Mercante, quien fue posteriormente reemplazado por la intervención realizada como consecuencia del golpe de Estado de marzo de 1976.

Como bien lo señalan Magdalena Lanteri y Talia Meschiany, las acciones desatadas en la UNLP a partir de 1974 “reponen una imagen más ajustada de la dinámica de violencia que en forma espiralada y vertiginosa traccionaba al país hacia marzo de 1976” (Lanteri y Meschiany, 2019).

La Universidad Nacional de San Luis

En la recientemente creada Universidad de San Luis,³⁴¹ Taiana nombró como rector interventor a Mauricio Amílcar López, un profesor de Filosofía nacido en Bahía Blanca con una historia de militancia juvenil vinculada al cristianismo social y latinoamericanista, pero que en la coyuntura no se identificaba con ninguna fuerza partidaria. Quizá por ello, López pudo sobreponerse a las fuertes tensiones que atravesaban al movimiento estudiantil puntano, marcado por la competencia entre los partidarios de la Tendencia agrupados en la JUP y aquellos agrupados en el Movimiento Universitario Nacional liderado por Roberto Grabois.

En este marco, el nuevo rector conformó un gabinete políticamente amplio y plural que inició un proceso de reformas que buscaban, como señala

340 *Ibidem*.

341 La Universidad Nacional de San Luis se creó poco antes de la asunción de Cámpora, el 10 de mayo de 1973, por medio de la Ley 20365. Su punto de partida fueron las facultades de Pedagogía y Psicología y de Física, Química y Matemáticas, que hasta entonces dependían de la Universidad Nacional de Cuyo.

Roberto Follari (2018), “articular la teoría con la práctica en la formación de los estudiantes, y a la Universidad con el resto de la sociedad”. Entre las reformas llevadas a cabo, se creó una Comisión para el cambio académico que se abocó al proyecto de departamentalización de la Universidad y a la modificación de los planes de estudio “con la idea de crear autoconciencia entre los estudiantes de su rol social, sobre todo en relación con las necesidades de la provincia y la región” (Follari, 2018). Un proceso que no estuvo exento de fuertes discusiones y resistencias por parte de sectores docentes comprometidos con visiones meritocráticas y científicas de largo arraigo.

Asimismo, con la intención de profundizar el vínculo con la sociedad, se creó una Secretaría de Transferencia a la Comunidad a partir de la cual multiplicar las actividades de extensión bajo la impronta del pensamiento de Paulo Freire. Dentro de la Secretaría se creó también la Dirección de Cultura para profundizar este vínculo a través del terreno artístico. Experiencia que implicó “una verdadera explosión de prácticas y de sensibilizaciones que tuvo efectos más allá de la propia UNSL” (Follari, 2018). También se creó una Dirección de Deportes con el objetivo de estimular la participación estudiantil en prácticas recreativas de carácter colectivo. Pero como dato sobresaliente y apuesta política más inmediata y visible, la UNSL se embarcó en la creación de una planta piloto de medicamentos de alta calidad y a bajo precio con los recursos humanos y equipos de investigación radicados en las carreras de Bioquímica y Farmacia. Esta propuesta sufrió la embestida judicial de los grandes laboratorios que adujeron en su contra que este proyecto implicaba una “competencia desleal” (Follari, 2018).

Todo lo antedicho, por otra parte, se llevó adelante en un nuevo marco institucional en el que el cogobierno reconocido por la nueva Ley universitaria se plasmó en la Universidad de San Luis de modo totalmente igualitario en sus órganos de gobierno.

Esta Universidad no fue particularmente afectada por la derechización que siguió a la designación de Ivanissevich y, de hecho, funcionó como refugio para muchos profesores perseguidos y

cesanteados en otras universidades nacionales, particularmente la de Cuyo (Vélez, 1999). Si bien, durante todo el período analizado, el rector Mauricio López pudo sostener su gestión a pesar de los avatares políticos nacionales y los recambios ministeriales, no pudo sortear los embates represivos de la dictadura que primero lo corrió de su puesto y luego lo secuestró de su domicilio en Mendoza durante la madrugada del 1° de enero de 1977.³⁴² Actualmente el principal auditorio de la UNSL lleva su nombre.

La Universidad Nacional del Comahue

El último caso que vamos a mencionar es el de la Universidad Nacional del Comahue, una universidad recientemente nacionalizada sobre la base de la preexistente Universidad Provincial de Neuquén.³⁴³ Como en otras universidades, allí también una asamblea numerosa de estudiantes, trabajadores docentes y no docentes, convocada por la JUP en Neuquén, resolvió tomar la Universidad en mayo de 1973 y constituir un “comité de gestión”³⁴⁴ tripartito que se hiciera cargo de la gestión de la Universidad a la espera del nombramiento de las nuevas autoridades.

El 1° de junio el PEN resolvió la designación como interventor de Raymundo Salvat. Según trascendidos, esta designación habría sido producto de negociaciones entre el Ministerio, el senador Elías Sapag y el ex rector Enrique Oliva. Aunque hubo algunas asambleas con la intención de desconocer al interventor, esto no prosperó y unos días más tarde tomó posesión del cargo (Zambón, 2008: 91-92).

342 Su desaparición ha sido juzgada en Mendoza y por testimonios de sobrevivientes se identificó su paso por el CC-DTyE Campos Las Lajas, perteneciente a la Fuerza Aérea.

343 Este caso fue reconstruido en detalle por Humberto Zambón —decano de la Facultad de Economía y Administración de la UNCo desde 1973 a 1975— y su investigación fue publicada como *La misión Remus Tetu en el Comahue* (2008); y también contamos con trabajos como el de Graciela Luorno sobre las políticas de extensión a comienzos de los años setenta (2008).

344 Integrado por Osvaldo Ardiles —luego reemplazado por José Luis Parisí—, Roberto Lacoste y César Roldán.

Salvat integró a su gabinete a algunos referentes del Comité de Gestión y con su Resolución 2 ratificó todo lo actuado por este órgano que siguió existiendo con el nombre de Comité de Movilización. Por estas razones, el novel rector comenzó a ser duramente cuestionado por los gobernadores de Neuquén y Río Negro y en menos de dos meses renunció (Zambón, 2008: 94).

En su reemplazo, Taiana designó como nuevo interventor a Antonio Güemes, quien antes de asumir declaró por televisión nacional que iba al Comahue “a cortarle la cabeza a la víbora marxista que se ha instalado allí”. Como reacción a sus palabras, una asamblea interclaustrós decidió desconocerlo e impedir su ingreso a la Universidad y tuvo que constituir su despacho en un hotel cercano. A partir de ese momento y hasta octubre, la Universidad del Comahue se sumió en un conflicto político con el Ministerio y se autoorganizó para asumir la gestión efectiva de la Universidad a través de un consejo de decanos designado por una asamblea interclaustrós.

Esta situación abrió una dinámica de confrontación que implicó, por ejemplo, que Güemes denunciara ante la justicia a los decanos por usurpación de poder y que propiciara un allanamiento en busca de armas en varias sedes de la Universidad y que el Ministerio dejara de enviar las partidas presupuestarias para pagar salarios y clausurara las cuentas bancarias de la Universidad. Desde el campo contrario, se desafiaban estas medidas tanto desde lo administrativo —movilizando los fondos propios para pagar salarios— como desde lo político —eligiendo candidatos a rector en asambleas multitudinarias y elevando sus nombres al Ministerio con la intención de que se los designara—. En este clima de “desobediencia” y luego de una marcha estudiantil que, según Zambón, hizo necesario que Güemes fuera escoltado por un patrullero desde su improvisado despacho para poder salir resguardando su integridad física, Taiana finalmente cedió y nombró como nueva autoridad transitoria a otro asesor ministerial, Rubén Darío Gómez (2008: 106-107).

Gómez se hizo cargo el 14 de septiembre, dejó sin efecto las resoluciones dictadas por Güemes, ratificó a todos los decanos y tomó una medida simbólica muy bien recibida: nombró “Salvador Allende” al aula magna de la Universidad (Zambón, 2008: 108). Las actividades académicas y administrativas comenzaron a encauzarse aunque el estado de asamblea y movilización permanente continuó en el marco de las negociaciones que se pusieron en marcha con el fin de buscar un nombre que pudiera reunir apoyos suficientes para encabezar el Rectorado. El elegido fue Roberto Noel Domecq, que asumió como rector interventor en octubre de 1973 y posteriormente fue nombrado normalizador.³⁴⁵

Según Zambón, la rectoría de Domecq —que conformó un consejo asesor con representación de los tres claustros— “se caracterizó por la gran participación democrática” y por su apuesta a consolidar la investigación en función del desarrollo regional, para lo cual firmó varios convenios de colaboración con las provincias. Particularmente, su política extensionista, a cargo de referentes de la JUP local,³⁴⁶ ha sido destacada como renovadora por Graciela Luorno (2008) por su articulación con las actividades académicas y de investigación y por su intención de romper con la perspectiva liberal-difusionista para comenzar a producir “hechos culturales que sirvan a la liberación del ‘pueblo’ y la integración del conjunto de la Patagonia a la Nación Argentina” (2008: 150).

345 Había sido estudiante de Ciencias Económicas en la UBA y con una beca se había doctorado en Francia. Zambón lo define como un economista de ideas progresistas, cercano al desarrollismo, que había sido técnico del CONADE a cargo de la delegación Patagonia y había participado en la reorganización del Departamento de Economía de la Universidad Nacional del Sur (Zambón, 2008: 108-109).

346 Los dos que dirigían la Secretaría están desaparecidos. En 1973 fue nombrado Enrique Tomás Desimone en la Dirección de Extensión Universitaria. Era militante de Montoneros (venía de Descamisados) y públicamente referente de la JTP de la Regional VII. El otro que asumió como secretario de Extensión fue Hernán “Tato” Osorio, de Montoneros.

En esta clave, se pusieron en marcha dos líneas de trabajo. Aquella que apuntaba a crear vínculos con la comunidad local y que incluyó la creación de una Dirección de Arte y Cultura, importantes programas de alfabetización y de recuperación y difusión de las tradiciones locales (la coordinación regional de la CREAR [Campaña de Reactivación Educativa del Adulto para la Reconstrucción], acciones con los pueblos originarios de la región para estudiar la problemática de la tierra, el Proyecto Araucano, el Programa de Artesanos Mapuches y la creación del Centro de Arqueología y Antropología). La otra se centraba en la articulación con el medio productivo a través de propuestas de capacitación laboral y de articulación entre sindicatos y empresas (a través de cursos de capacitación para obreros, técnicos e ingenieros dictados por el CETCA (Centro de Transferencia y Capacitación) en convenio con la Universidad, así como a través de proyectos específicos que respondían a demandas puntuales de empresas y gremios regionales como Hidronor, SUPE y FATRE, por ejemplo). Ambas líneas de trabajo, por su parte, tuvieron en la creación de una radio y un canal de TV universitarios los soportes fundamentales para su difusión y visibilización.

Particularmente en la provincia de Neuquén esta política creó importantes tensiones con los referentes territoriales del partido gobernante y con los gremios ortodoxos de la CGT local. Como menciona Luorno, la política de extensión elaborada en estos años “se ejecutó bajo el prisma de dos vías complementarias y, a la vez, en tensión: la de la articulación con el medio a través de la comunidad organizada y la de la actuación directa con los ‘sectores populares’ a partir de la educación popular y de la recuperación cultural” (2008: 149); dos perspectivas difícilmente conciliables en el contexto de polarización política del período.

Hacia fines de 1974, ya con la gestión Ivanissevich, la escalada de amenazas provenientes de la ortodoxia sindical forzó al rector Domecq al exilio y a la renuncia colectiva de todos los decanos. En su reemplazo, el Poder Ejecutivo designó en enero de 1975 a Remus Tetu, un profesor de origen rumano con fuertes vínculos con

el nacionalismo católico de derecha de Bahía Blanca y que, poco después, fue nombrado también interventor de la Universidad Nacional del Sur.

Cuando se hizo cargo del Rectorado, Tetu llamó a una conferencia de prensa y expresó: “Vengo en son de paz, pero si alguien quiere guerra, va a tener guerra y le va a costar mucho, porque yo sé pegar fuerte” (Zambón, 2008: 126). Sus primeras medidas fueron limitar los servicios de todo el personal docente y no docente hasta el 31 de enero para su revisión, desconocer a las organizaciones estudiantiles, de docentes y no docentes y declarar ilegales sus reuniones. Como resultado de ello, se produjeron un total de 121 cesantías junto a un alto número de renuncias, la limitación en sus cargos de muchos docentes interinos y la suspensión de muchos proyectos y programas de extensión e investigación. Para acompañar estas políticas, Tetu implementó un programa de vigilancia a la cabeza del cual designó a su guardaespaldas personal, Raúl Guglielminetti,³⁴⁷ y como medida de carácter simbólico rebautizó el aula magna “Salvador Allende” como “Perito Francisco Moreno”.

En el documento de denuncia mencionado previamente, la CTERA le dedicó a Remus Tetu quince páginas en las que se detallan los devastadores efectos de su política sobre la comunidad universitaria del Comahue. Aunque desde un punto de vista opuesto, el secretario de la CGT regional Neuquén rectificaba ese diagnóstico cuando expresaba su “plena satisfacción” con la gestión de Tetu, porque había “logrado la erradicación de la subversión y porque abrió

por primera vez las puertas de esa casa de estudios a la CGT con la inauguración de la Escuela Sindical” (Rodríguez, 2014a: 17).

La intervención de Tetu terminó el 19 de noviembre de 1975, con el nombramiento como rector normalizador de Alberto Julio Dosko, que dirigió la Universidad hasta marzo de 1976.

Conclusiones

Analizar la historia de las universidades nacionales durante estos pocos pero intensos y conflictivos años implica recuperar los intentos por transformar las universidades desde adentro, para ponerlas al servicio de un proyecto de país que, para gran parte de los propios actores universitarios, implicaba avanzar también hacia una transformación profunda de la sociedad. Fue en este marco que se ensayaron experiencias novedosas de organización, gestión y planificación académica y científica como modo específicamente universitario de acompañar y direccionar el proceso de reconstrucción nacional.

Por eso mismo, recuperar esta historia implica también recuperar tanto las expectativas como las tensiones que estas experiencias generaron al interior de un campo político donde la dirección y el sentido del proceso de reconstrucción nacional abierto por el triunfo electoral del peronismo estaba fuertemente en disputa. En este marco, las universidades nacionales se constituyeron en uno de los territorios centrales para la agitación política de las fuerzas radicalizadas tanto del peronismo como de la izquierda y, consecuentemente, en espacio también privilegiado para la reacción.

Estas experiencias, por su parte, no pueden desligarse de los contextos universitarios y regionales específicos en donde se pusieron en marcha y dentro de los cuales cada caso adquirió sus matices, marcas y características distintivas; particularidades sobre las que hay que seguir investigando a fin de lograr una imagen más precisa del heterogéneo mundo universitario de aquellos años. No obstante, la dinámica del proceso político nacional terminó subsu-

347 Raúl Antonio Guglielminetti fue agente civil de inteligencia del Batallón 601 del Ejército y desde los años ochenta ha tenido mucha exposición mediática. En 2011, en el marco del juicio por los crímenes de lesa humanidad ocurridos en Automotores Orletti fue condenado a veinte años de prisión. Para más información: “Les a Humanidad: difundieron fallo que condenó a cuatro acusados por delitos en Automotores Orletti”, Centro de Información Judicial, 1° de junio de 2011. Recuperado de <https://www.cij.gov.ar/nota-6923-Lesa-humanidad--difundieron-fallo-que-conden--a-cuatro-acusados-por-delitos-en-Automotores-Orletti.html>.

miendo estas particularidades en un ciclo de clausura, persecución y represión que, iniciado tempranamente hacia mediados de 1974 en algunas universidades, se irá profundizando y extendiendo sin pausa a partir de entonces, prefigurando también el estado de violencia y terror que se instalará en todo el país a partir del golpe de Estado de 1976.

Finalmente, y para seguir pensando, nos parece interesante señalar que aquellos proyectos de renovación y democratización universitaria que, en el contexto de la época, fueron interpretados y resistidos por las fuerzas reaccionarias como “subversión” del orden natural y las jerarquías tradicionales, vistos a la distancia, pueden interpretarse como experiencias cuyos legados podemos encontrar integrados hoy en las leyes y los estatutos, como principios que rigen los objetivos, las formas del cogobierno y las perspectivas académicas, de extensión y de investigación que predominan en nuestro actual sistema universitario.

Referencias bibliográficas

Abbattista, M. L. (2019). *Justicialismo y cultura en la Guerra Fría: El retorno de Oscar Ivanissevich al Ministerio de Cultura y Educación (Argentina 1974-1975)*. Tesis de Maestría en Historia y Memoria, FAHCE-UNLP. Recuperada de <http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1801/te.1801.pdf>.

Abbattista, L. y Carnagui, J. (2014). La “depuración oficial” en las políticas educativas: La gestión Ivanissevich en el Ministerio de Educación de la Nación y su impacto en la UNLP (ponencia). *VIII Jornadas de Sociología de la UNLP, Ensenada*, Argentina. Recuperado de http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.4333/ev.4333.pdf,

Barletta, A. M.

(2001). Peronización de los universitarios (1966-1973). Elementos para rastrear la constitución de una política universitaria peronista. *Pensamiento Universitario*, 9(9), pp. 82-89.

(2018). Apuntes sobre un legado invisibilizado: Universidad y peronismo en la UNLP, 1972-1974. *Nuevas bases para la Reforma Universitaria*, 4. IEC-CONADU. Recuperado de http://iec.conadu.org.ar/files/publicaciones/1540404666_la-plata-1972-1974.pdf.

Barletta, A. M.; Lenci, L. y Ramírez, A. J. (2013). Democracias en pugna. Un intento de recuperar los sentidos perdidos. *Cuestiones De Sociología*, (9). Recuperado de <https://www.cuestionessociologia.fahce.unlp.edu.ar>.

Bozza, J. A. (2001). El peronismo revolucionario. Itinerarios y vertientes de la radicalización. *Revista Sociohistórica. Cuadernos del CISH*, (9/10), pp. 135-169.

Carnagui, J. L. (2016). *Nacionalistas, católicos y peronistas. Auge, afianzamiento y reconfiguración de la Concentración Nacional Universitaria (CNU). La Plata, 1955-1974*. Tesis de Doctorado en Historia, FAHCE-UNLP. Recuperado de <http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1255/te.1255.pdf>.

CTERA (1975). *Universidad: la “misión” del caos y la destrucción...* Buenos Aires: CTERA.

Dip, N. (2017). *Libros y alpargatas: la peronización de estudiantes, docentes e intelectuales de la UBA (1966-1974)*. Rosario: Prohistoria.

Friedemann, S. (2015). *La Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires (1973-1974). Una reforma universitaria inconclusa*. Tesis de Doctorado, Facultad de Ciencias Sociales, UBA.

Follari, R. (2018). De aquellas primaveras. *Nuevas bases para la Reforma Universitaria*, 3, IEC-CONADU.

Godoy, E. (1995). *La historia de ATULP*. La Plata: ATULP.

Iuorno, G. (2008). Las políticas y las acciones de extensión en la Universidad Nacional del Comahue (1973-1976). *Revista de Historia*, (11). Recuperado de <http://revele.uncoma.edu.ar/htdoc/revele/index.php/historia/article/view/199>.

- Ivanissevich, O. (1974). *Mensaje de su Excelencia el señor Ministro de Cultura y Educación Doctor Oscar Ivanissevich 10 de setiembre de 1974*. Buenos Aires: Centro Nacional de Documentación e Información Educativa, Ministerio de Cultura y Educación.
- Ivanissevich, O. y Frattini, C. (1975). *La escuela Argentina en 1975*. Buenos Aires: Ministerio de Cultura y Educación, pp. 39-40.
- Lanteri, M. (2009). "Los pasos previos". El largo proceso de conformación de la JUP en la Universidad Nacional de La Plata (1960-1973). *XII Jornadas Interescuelas/Departamentos de Historia*. Universidad Nacional del Comahue. Recuperado de <https://cdsa.aacademica.org/000-008/1039.pdf>.
- Lanteri, M. y Meschiany, T. (2015). Bases para la Nueva Universidad. La UNLP entre 1973 y 1976. *XI Jornadas de Sociología*. Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Recuperado de <http://cdsa.aacademica.org/000-061/922.pdf>.
- (2019). Proyectos en disputa: la Universidad Nacional de La Plata entre 1973 y 1976. Un análisis frontal de la dinámica universitaria. En L. Lenci y J. Cernadas, *Futuros en pugna*. En prensa.
- Nievas, F. (1999). Cámpora: primavera-otoño. Las tomas. En A. Pucciarelli (coord.), *La primacía de la política. Lanusse, Perón y la Nueva Izquierda en tiempos del GAN*. Buenos Aires: Eudeba.
- Raffo, J. (1994). *Documentos para la historia de la UNLZ*. Buenos Aires: edición de autor.
- Ramírez, A. J. (1999). Radicalización y peronización de los estudiantes universitarios. El caso de la Universidad Nacional de La Plata. *Cuadernos del CISH*, (5).
- Rodríguez, L. G. (2014a). La universidad durante el tercer gobierno peronista. *VIII Jornadas de Sociología de la UNLP*. Departamento de Sociología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, La Plata.
- (2014b). La Universidad Nacional de La Plata entre 1973 y 1983. *Polhis*, 7(14), pp. 259-279. Recuperado de http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/art_revistas/pr.9181/pr.9181.pdf.
- (2015). *Universidad, peronismo y dictadura. 1973-1983*. Buenos Aires: Prometeo Libros.
- Rovelli, L. (2009). Del plan a la política de creación de nuevas universidades nacionales en Argentina: la expansión institucional de los años 70 revisitada. *Temas y Debates*, (17), pp. 117-137. Recuperado de https://rephip.unr.edu.ar/bitstream/handle/2133/1839/TyD17-Rovelli_Laura.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
- Suasnábar, C. (2004). *Universidad e intelectuales, educación y política en la Argentina (1955-1976)*. Buenos Aires: Flacso-Manantial.
- Tocho, F. (2020). *Lógicas políticas en tensión. La Tendencia Revolucionaria del Peronismo y su participación en el gobierno constitucional de la provincia de Buenos Aires (1973-1974)*. Tesis de Doctorado en Historia, FaHCE-UNLP. Recuperada de <http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/tesis/te.1869/te.1869.pdf>.
- Vélez, R. (1999). La represión en la Universidad Nacional de Cuyo. Antecedentes. Reflexiones. Mendoza: Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Universidad Nacional de Cuyo.
- Zambón, Humberto (2008). *La misión Remus Tetu en el Comahue*. Neuquén: Editorial de la Universidad Nacional del Comahue.